

SEBASTIÁN ROYO

El escándalo en el que se ha visto envuelto el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz –investigado por favorecer a su novia, funcionaria de la institución– ha dañado, según el autor, lo que debería ser el principal valor del cargo que ocupa, la credibilidad. En su opinión, a Wolfowitz no le queda otra salida que la dimisión



Paul Wolfowitz debe irse

La reunión bianual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que tuvo lugar en Washington el pasado fin de semana ha estado marcada por el escándalo que ha salpicado al presidente del Banco Mundial, el estadounidense Paul Wolfowitz. Según las informaciones publicadas en los últimos días, a su llegada al Banco Mundial, Wolfowitz se involucró directamente en una promoción y subida salarial de su compañera sentimental, la ciudadana británica Shaha Ali Riza.

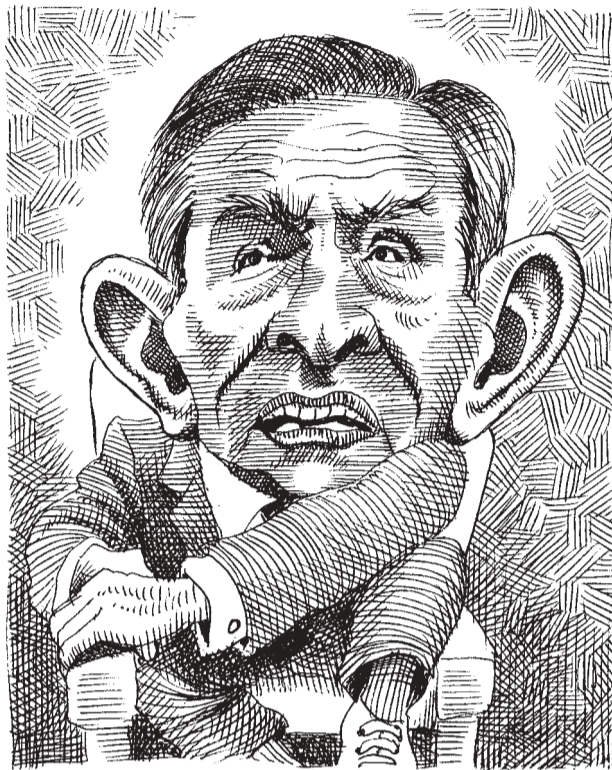
De acuerdo con las regulaciones internas del Banco Mundial, los esposos y compañeros sentimentales no pueden supervisarse unos a otros ni pueden trabajar bajo la misma línea de autoridad. Riza trabajaba antes de llegar Wolfowitz al Banco Mundial en el departamento de Oriente Próximo y Norte de África. Como presidente del Banco Mundial, Wolfowitz supervisa a todos los empleados, por lo que tuvo que anunciar su relación con Riza. El comité ético del consejo de dirección del banco sostuvo que Riza debería de ser trasladada a otro puesto fuera de su supervisión.

En un principio, Wolfowitz solicitó que se la autorizase a continuar trabajando en el mismo departamento y ofreció a excluirse de decisiones que afectasen a su salario y condiciones de trabajo. Esta solución no se consideró satisfactoria y, de acuerdo con

los documentos publicados esta semana, el comité ético recomendó que se la promocionase, pero no se sugería, contrariamente a lo que los ayudantes de Wolfowitz anunciaron la semana pasada, que también se le subiese el salario.

Pese a esta recomendación, Wolfowitz decidió ordenar al vicepresidente de recursos humanos del Banco Mundial, el español Xavier Coll, que ofreciese a Riza una promoción y además una subida salarial muy por encima de la que acompañaría a una promoción a ese nivel, así como una garantía de subidas salariales del 8% anual a partir de ese momento y un compromiso de que se la volvería a promocionar cuando volviese al Banco Mundial. La decisión final fue asignarla al Departamento de Estado de EE UU y subirle el salario en casi 61.000 dólares, dejando su remuneración anual en 193.590 dólares libres de impuestos (un sueldo más alto que el de la propia secretaria de Estado, Condoleezza Rice).

Esta decisión se enmarca dentro de la polémica gestión de Wolfowitz en el Banco Mundial desde su nombramiento, que también fue muy controvertido. Se ha rodeado de una guardia pretoriana de *outsiders* con personalidades volátiles y estrechos vínculos con el Partido Republicano (como sus asesores Robin Cleveland y Kevin Kellers, a los cuales contrató con el salario más alto del Banco



ÁNGEL NAVAS

Mundial saltándose los canales establecidos) y dejando de lado a figuras claves del Banco Mundial, lo que ha llevado a la dimisión de aproximadamente 12 directivos del más alto nivel, incluidos el director gestor de la institución, el asesor legal, el director financiero y seis vicepresidentes, lo que ha causado un gran descontento dentro de la institución. Al mismo tiempo, Wolfowitz se ha enfrentado con el consejo de dirección y con algunos países miembros, particularmente por su campaña contra la corrupción, que hizo saltar las alarmas por la posible politización de las decisiones del banco.

Las alegaciones sobre Riza han dañado lo que debería de ser el principal valor del presidente del Banco

Para resultar creíbles, los funcionarios del Banco Mundial deben ser los primeros en aplicar lo que predicán y dar ejemplo de buenas prácticas

Mundial: su credibilidad. La capacidad de acción del banco depende no sólo del dinero que distribuye a países en desarrollo sino también de su legitimidad como líder en los proyectos de desarrollo, incluyendo su papel como campeón del buen gobierno. La decisión de Wolfowitz refuerza la desconexión entre lo que él y el Banco Mundial exigen de los países en desarrollo (buen gobierno, transparencia y controles) y los procedimientos internos del propio banco. Para ser creíbles deberían de ser los primeros en aplicar lo que predicán y ser ejemplo de buenas prácticas. Mientras Wolfowitz se mantenga en el puesto esto no será posible ya que carece de credibilidad interna y externa.

En estos momentos el comité ejecutivo del Banco Mundial continúa con su investigación del caso, que incluye la posible violación de las normas internas del banco, por favoritismo que bordea el nepotismo y un intento de tratar de ocultar la verdad. Más que suficiente para exigir su salida. Sin embargo, Wolfowitz sigue contando con el apoyo del Gobierno de EE UU y de países africanos. Los países europeos, particularmente Alemania y Reino Unido, han sido los más enérgicos en exigir su marcha, pero no han presentado un frente común (Francia y España sorprendentemente han sido de los menos activos en contra de Wolfowitz). Es de esperar que Wolfowitz sepa anteponer los intereses del Banco Mundial a los suyos propios y dimita. Si él no lo hace, el consejo debería destituirle.

Decano en la Universidad de Suffolk en Boston, director de su campus en Madrid y codirector del seminario de Estudios Ibéricos de Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard (sroyo@suffolk.edu)

JOSÉ ARANDA

La necesaria confianza en la estadística

A nadie se le ocultan los permanentes conflictos que tendrían lugar si las cifras producidas por el sistema estadístico estuvieran sometidas a sospecha. Las Administraciones públicas y los agentes económicos y sociales no podrían basarse en el diagnóstico de la realidad sobre la que han de actuar y, por tanto, sus decisiones tendrían un carácter incierto. La evolución de los diferentes fenómenos también sería dudosa y, por tanto, se carecería de criterios para evaluar la eficacia con la que se viene afrontado la gestión de los diferentes problemas. El sentimiento de agravio de las diferentes Administraciones nacionales o regionales sería inevitable por la natural creencia de estar contribuyendo más y percibiendo menos de lo que correspondería en un sistema justo de reparto. La desorientación de la opinión

pública sería absoluta y carecería de criterio para valorar objetivamente la gestión o las propuestas de aquellas fuerzas políticas en las que depositar su confianza.

La conciencia de este gravísimo problema ha llevado a elaborar leyes nacionales que, como en la de la Función Estadística Pública de España, garantizan la independencia del Instituto de Estadística, la formación científica de su personal y su seguridad en el empleo con independencia de avatares políticos, lo que se suele conseguir mediante oposiciones públicas, la transparencia de sus métodos de trabajo y otro cúmulo de medidas, como la publicación de resultados y sus correspondientes análisis en fechas predeterminadas por calendario, para salvar el escollo de la eventual oportunidad de la salida de datos.

También a nivel interna-

cional se han reforzado estas garantías, como hizo la Comisión Estadística de Naciones Unidas en abril de 1994 al establecer los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, haciendo hincapié, al igual que después se haría en el seno de la Unión Europea, en la necesaria independencia, integridad y responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de los organismos internacionales. Para asegurar este objetivo, entre otras muchas acciones, se imponen códigos de buenas prácticas y metodologías comunes y se realizan auditorías que verifican periódicamente la calidad de todas y cada una de las fases del proceso estadístico en los diferentes Estados.

A pesar de estas cautelas, en ocasiones se alzan voces poniendo en duda esta independencia y neutralidad

que ha de caracterizar la tarea estadística. Recientemente, desde el programa *La linterna* de la cadena COPE y las páginas de *Expansión* se ha asegurado que el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) disminuye artificialmente las cifras de crecimiento económico de las comunidades gobernadas por el PP, subiendo las de aquellas otras que están regidas por el PSOE, reduce también fraudulentamente las cifras de población de las comunidades del PP para que tengan menos escaños en las próximas elecciones y gocen de menos financiación y adultera toda la información económica y demográfica para ocultar, entre otras cosas, que el PIB en paridad de poder de compra ha disminuido, que el paro ha aumentado en términos homogéneos o que la productividad comparativa de Es-

paña con Europa ha caído al nivel que tenía en 1967.

Estas graves afirmaciones, que se ven complementadas por otras tan peregrinas como que en España hay dos millones de personas más que las contadas por el INE o que es imposible que la población activa crezca más que la población total, no merecerían mayor atención si no fuera por la posibilidad de que pudieran ser el inicio de una campaña política que tuviera por objetivo desmontar las buenas noticias económicas de los últimos tiempos, cuestión que por supuesto no tendría como protagonistas al equipo económico de la oposición, que viene haciendo gala de rigor y ponderación, sino a otros voceros que no destacan por su prudencia.

Quien pueda creer exagerado este temor por una posible campaña puede recurrir

a la prensa de marzo de 1991 y rescatar las acusaciones de que el INE iba a facilitar a la policía y al fisco los datos del Censo de Población que se comenzaba a recoger, que se invadía la intimidad y se preguntaba sobre el aborto (la pregunta se refería a hijos nacidos con vida aunque hubieran podido fallecer), induciendo a los ciudadanos a no censarse o a dejar de responder parte del cuestionario. En aquella ocasión, cuando se publicaron las cifras provisionales, se acusó cínicamente al INE de haber dejado de contar un millón de ciudadanos, lo que, en todo caso, se hubiera debido a quienes habían protagonizado tan irresponsable campaña contra una operación de Estado como es el Censo, cuestión que, por supuesto, nunca llegarían a reconocer.

Economista y estadístico

